



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial del Poder Público



## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de noviembre  
de dos mil veintidós (2022)

### SENTENCIA

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **MARÍA DE LAS MERCEDES GÓMEZ VÁSQUEZ**  
**Demandadas** : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 005 2020 00285 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, capacidad laboral residual-  
**Decisión** : Confirma Sentencia absolutoria  
**Sentencia No** : 260

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### **Pretensiones:**

Se declare que a la demandante le asiste derecho a **pensión de invalidez de origen común**, con fundamento en el ejercicio de la **capacidad laboral residual, conforme a los requisitos de la Ley 860 de 2003, a partir del 1° de junio de 2016 día siguiente a la última cotización**; se condene al reconocimiento y pago de pensión de invalidez, mesadas adicionales, **intereses moratorios** o indexación, costas procesales.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma que la señora María de las Mercedes Gómez Vásquez fue calificada por el I.S.S. mediante dictamen del 25 de junio de 2009, asignándole el 51.50% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración el 19 de septiembre de 1995, con motivo del diagnóstico “*distimia trastorno depresivo mayor recurrente y refractaria con múltiples intentos suicidas*”; encontrándose bajo tratamiento psiquiátrico farmacológico, siendo una enfermedad crónica de larga duración y progresión general lenta, sin solución definitiva; reclamó pensión de invalidez el día 19 de diciembre de 2016, siendo negada mediante Resolución GNR 391015 del 27 de diciembre del mismo año, aduciendo la entidad que no cumple el requisito de densidad de semanas según el artículo 39 de la Ley 100 de 1993; **omitiendo estudiar el reconocimiento de la prestación bajo el ejercicio de la capacidad laboral residual**, según Sentencia SU-588 de 2016 y así determinar el momento a partir del cual se contabilizan la semanas conforme a la Ley 860 de 2003. Informa que la última cotización la efectuó el día 30 de

mayo de 2016, cuando no pudo seguir aportando al Sistema de Pensiones debido a su cuadro clínico, fecha en la que perdió de forma definitiva y permanente su capacidad laboral, contando con 153.85 semanas cotizadas entre el 30 de mayo de 2016 y el mismo día y mes del año 2013.

### **Respuesta a la demanda:**

**COLPENSIONES** a través de apoderada judicial, aceptó lo referente al dictamen emitido y el no reconocimiento de la pensión de invalidez; explica que en ocasión anterior se había negado la prestación económica mediante Resolución No 016482 del 30 de agosto de 2010; sostiene que según historia laboral actualizada a enero de 2021, **la demandante aparece cotizando para noviembre de 2020, sin que exista certeza de haberse realizado con la fuerza residual de su capacidad laboral, ya que para julio de 2020 se encontraba radicada en España**, según historia clínica aportada. Se opuso a las pretensiones formuladas y formuló en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez e intereses moratorios, improcedencia de indexación, compensación, descuentos del retroactivo por salud, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, genérica.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

**El Juzgado Quinto Laboral del Circuito** de Medellín, mediante Sentencia del 5 de agosto de 2021, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y **absolvió a COLPENSIONES** de las pretensiones formuladas en su contra; impuso Costas a cargo de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526, en favor de COLPENSIONES.

**Recurso de apelación apoderada de la demandante:**

**Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda,** afirmando que corresponde a la entidad administradora del Sistema de Seguridad Social Integral a la que corresponde la carga de acreditar la irregularidad del acto que se cuestiona, esto es, las cotizaciones efectuadas por la demandante, cuando se presumía que no tenía la capacidad laboral para hacerlo, debido a la presunción de buena fe a favor del afiliado como parte débil de la relación; sin que se encuentre limitada para desempeñar algún oficio, habiendo realizado unos aportes como independiente, la persona puede seguir útil a la sociedad y cotizando al sistema, aún percibiendo una pensión de invalidez o como independiente, no pudiéndose presumir la falta de validez de esos aportes, ya que existen diferentes entidades que controlan ese acto; se trata de cotizaciones significativas posteriores al año 1995 y sigue contribuyendo al sistema, cumpliéndose con el principio de sostenibilidad financiera, por lo que no puede presumirse que no son derivadas de su trabajo como independiente. Refiere a correcciones laborales o moras del empleador no tenidas en cuenta por COLPENSIONES en el trámite administrativo. Se trata de un derecho fundamental, estando en riesgo el mínimo vital, la dignidad humana y derechos de las personas en situación de discapacidad. Expone que no se efectuó un estudio integral, sobre las correcciones de historia laboral, moras, cálculos actuariales, situaciones muy comunes a la informalidad de nuestro país, sujetándose el Juzgado solo a las pretensiones formuladas en la demanda. Refiere a que conforme a jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, para la capacidad laboral residual se debe existir una enfermedad congénita, crónica o degenerativa,

aportes realizados al sistema en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, determinarse el momento desde el cual se contabilizarán las semanas, pudiendo ser la fecha de calificación o la última cotización efectuada o de la solicitud de reconocimiento pensional, siendo evidente en este caso la capacidad laboral remanente; siendo sospechoso para el Juzgado que la demandante continuara laborando o que se encuentre en España y laborando allí, existiendo la posibilidad de efectuar estas cotizaciones en Colombia y además hay entidades públicas que lo respaldan; la demandante ha contado la capacidad económica para contribuir al sistema en diferentes épocas y puede continuar contribuyendo aún si adquiere la pensión de invalidez.

### **Alegatos de conclusión:**

Las apoderadas de las partes reiteraron argumentos expuestos en el trámite de Primera Instancia y al sustentarse el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con los

artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, analizándose si está demostrado que las cotizaciones al Sistema de Pensiones en forma posterior a la fecha de estructuración de la invalidez y del dictamen, son producto de la capacidad laboral residual de la demandante y si en consecuencia, son válidas para acreditar la densidad de semanas exigida para acceder a la pensión de invalidez, tomando como referencia la fecha del dictamen o la última cotización.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

**No es objeto de discusión en esta segunda instancia,** que el I.S.S. emitió dictamen el día 25 de junio de 2009, asignándole a la señora María de las Mercedes el **51.50% de pérdida de capacidad laboral** de origen común, con **fecha de estructuración el día 19 de septiembre de 1995**, valorándose el diagnóstico “*distimia trastorno depresivo mayor recurrente múltiples intentos suicid*” (fls 11 y 12 archivo 03); según historia laboral generada por COLPENSIONES el 15 de enero de 2021, cuenta con 611.86 semanas cotizadas entre el 10 de abril de 1986 y el 30 de noviembre de 2020 (Expediente administrativo, archivo: GRP-SCH-HL-66554443332211\_1900-20210115081251); la demandante

reclamó el reconocimiento de pensión de invalidez el día 19 de diciembre de 2016, siendo negada mediante Resolución GNR 391015 del 27 de diciembre del mismo año, aduciendo que no se cumple con la densidad de semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (fls 13 y 14 archivo 03).

Para absolver a la entidad demandada **el Juez de Primera Instancia consideró en términos generales**, que se cotizaron 12 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez -19 de septiembre de 1995-, por lo que no cumple la densidad de 26 semanas requerida por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993; cotizó 68.42 semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de la calificación de la invalidez -25 de junio de 2009- y 90.29 semanas en los tres (3) años anteriores a la última cotización real - día 30 de noviembre de 2020-, que si bien superan el requisito de 50 semanas exigido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, no dan lugar al reconocimiento del derecho, por cuanto **no está demostrado que se efectuaron en ejercicio de una verdadera capacidad laboral residual, puesto que antes del año 2009 aparece cotizando como independiente y después del 30 de mayo de 2016**, fecha que se afirmó en la demanda como última cotización, **continuó cotizando al sistema de pensiones a través de diferentes empleadores cuya razón social no está relacionada con el oficio de estilista registrado en el dictamen y además, existen anotaciones en la historia clínica con atenciones médicas recibidas en el Reino de España para el año 2020**; país en el que aparece viviendo hace varios años, donde ha trabajado en peluquería y cuidando ancianos, **sin que exista constancia o soporte referente a que las cotizaciones en Colombia son producto de la capacidad laboral residual.**

Sobre lo que es objeto de apelación, tenemos que conforme al **artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral**; requisito acreditado por la demandante, pues según el **dictamen emitido por el I.S.S.** el 25 de junio de 2009, **se asignó a la señora María de las Mercedes el 51.50% de pérdida de capacidad laboral (PCL)** por enfermedad de origen común, con **fecha de estructuración el 19 de septiembre de 1995**; fecha para la cual se encontraba vigente el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, estableciendo en el literal b) que tendrán derecho a la pensión de invalidez los afiliados declarados inválidos: “...*b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez...*”. Observándose que la última cotización anterior se efectuó el 17 de febrero de 1993, por tanto, se trata de **cotizante inactiva para la fecha de estructuración de la invalidez y no acredita 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior** al estado de invalidez, esto es, entre el 19 de septiembre de 1995 y el mismo día y mes del año 1994 (historia laboral del 15 de enero de 2021, expediente administrativo); tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

**Respecto a los periodos de cotización del 1° de febrero al 30 de septiembre de 1995, reportados por la demandante como trabajadora independiente** (que equivaldrían a 34.28 semanas de cotización), sin que COLPENSIONES reconozca ninguna semana por esos periodos, registrándose la observación *no registra la relación laboral en afiliación para este pago*; debe decirse que **no es procedente tenerlos como válidos para efectos de cumplir las 26 semanas de cotización en el año anterior a la estructuración de la invalidez, toda vez que el pago de los aportes fue**



**efectuado el día 21 de julio del año 2016**, esto es, cuando habían transcurrido siete (7) años después de la calificación de la invalidez (2009) y 20 años contados desde los ciclos que se pretendió pagar (1995); lo procedente en estos casos, es que **las cotizaciones canceladas en forma posterior al período al que se pretendían imputar, por parte de trabajadores independientes** - como lo fue la demandante en esos periodos -, **se deben aplicar a períodos posteriores al pago, tal como lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL513-2020, reiterando SL3445-2019 y SL12503-2016**; veamos:

*“...En cuanto al tema de discusión, vale recordar que conforme al artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, las novedades de los trabajadores independientes «que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al mes siguiente», lo que significa que **los pagos realizados en periodos vencidos no se desperdician o desestiman, sino que se imputan a los meses subsiguientes**. Al respecto, en sentencia SL12503-2016, la Sala explicó:*

*El Tribunal para arribar a su decisión, asentó que las cotizaciones realizadas por la demandante en el mes de junio de 2006 para los ciclos comprendidos entre octubre de 2005 y junio de 2006, así como los efectuados en el mes de mayo de 2007, para el período de noviembre de 1997 a diciembre de 2000, no podían contabilizarse a efectos de determinar si la demandante había o no reunido el número de semanas necesarias para ser merecedora de la pensión consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en atención a que los mismos se habían realizado de manera extemporánea.*

*Con la inferencia anterior, el ad quem pasó por alto que **las cotizaciones canceladas en forma posterior al período al que se pretendían imputar, para el caso de los trabajadores independientes como lo fue la aquí demandante, no pierden validez, sino por el contrario, se deben aplicar a períodos posteriores al pago, tal como lo señaló esta Corporación en sentencia de casación CSJ SL 5634 2016, que reiteró las sentencias CSJ SL 13077 2014 y SL 5081 2015...**”* (Negritas fuera de texto).

De otro lado, es pertinente indicar que conforme al **artículo 3° del Decreto 1507 de 2014**, la **fecha de estructuración del estado de invalidez** es aquella en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una

enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos; debiendo determinarse en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional; fecha que “...debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral...”.

Sobre el tema objeto de apelación, **la H. Corte Constitucional en Sentencia SU 588 del 27 de octubre de 2016**, reiterada en Sentencias T-079 de 2019, T-435 de 2018, T-354 de 2018, T- 694 de 2017, entre otras, **estableció unas reglas especiales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, respecto de personas con enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas**, indicando que por ser enfermedades de larga duración y progresivas, pueden darse casos de **personas que no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un número importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada**; señalando que dichas semanas deben ser tenidas en cuenta con el fin de salvaguardar los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, entre otros. Explicó que en estos casos, **los efectos de la enfermedad no aparecen de manera inmediata**, sino en un tiempo prolongado, por lo que **la fuerza laboral va disminuyendo y eso permite que la persona pueda trabajar hasta que su nivel de afectación le impida desarrollar una labor**; precisó que **a la AFP le corresponde verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.**

Así mismo, indicó que **la capacidad laboral residual, corresponde a la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad, correspondiéndole a la AFP, comprobar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente ejercida;** pudiendo corresponder la fecha de estructuración con la de la calificación o la de la **última cotización**, presumiéndose que fue **en ese momento cuando el padecimiento le impidió a la persona continuar activa laboralmente y proveerse por sí mismo el sustento económico.**

En **Sentencia T 202 A de 2018**, señaló que **la fecha de estructuración debe corresponder a la fecha real en que la persona dejó de trabajar**, pues en los casos donde la persona padece de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, cuya agravación es progresiva, la junta médica debe analizar la fecha de imposibilidad para laborar según el cuadro de salud y no la fecha del diagnóstico o del primer cuadro clínico, a menos que desde esta se advierta la condición de invalidez inmediata; **permitiendo tener en cuenta los aportes realizados en forma posterior a la fecha de estructuración, acudiendo a la figura de la capacidad laboral residual, según la cual, el trabajador ha podido continuar trabajando y cotizando, hasta el momento en que definitivamente perdió por completo su fuerza laboral, aspectos que deben ser debidamente probados;** dejando claro que le corresponde al Juez determinar el momento a partir del cual verifica el cumplimiento de las exigencias de la Ley 860 de 2003, lo que no significa que está

habilitado para modificar la fecha de estructuración, al haber sido definida por autoridad médica competente.

Postura que ha acogido también la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, por ejemplo en **Sentencia SL1172-2022** Radicado 87758, reiterando **SL5695-2021**, SL770-2020 y SL3992-2019, señalando que por regla general para el reconocimiento de la pensión de invalidez, la normativa que rige es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez; pero que al considerar las **condiciones de especial protección** que merecen determinadas **personas**, como las **que padecen afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo**, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales **es procedente atender, para el cómputo de las semanas, la calificación** sobre pérdida de capacidad laboral, **la última cotización efectuada** o la **fecha de solicitud** de reconocimiento pensional, previo análisis de la situación particular; veamos:

*“... esta Sala de la Corte ha establecido que existen determinadas situaciones en las que hay cotizaciones que resultan válidas y contables más allá de la fecha de estructuración de la invalidez, eventos especiales que deben ser cuidadosamente esclarecidos por el juez, como es el caso de las enfermedades de carácter congénito, crónico o degenerativo o, como también se ha aceptado, las que se derivan de secuelas que con el paso del tiempo afectan la salud en una magnitud más gravosa y posterior al diagnóstico primigenio del padecimiento, pero que, en uno u otro caso, permiten al afiliado mantener su fuerza de trabajo y, por tanto, continuar laborando y aportando al sistema pensional con el fin de cubrir los riesgos de invalidez, vejez o muerte ...”.*

Así mismo, ha indicado que, aunque la discapacidad laboral en este tipo de enfermedades se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, siendo válidos para alcanzar el reconocimiento de la prestación (SL5023 de 2021).

**Condiciones que no se cumplen en el asunto bajo estudio;** si bien es cierto, la demandante cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores a la fecha del dictamen (entre el 25 de junio de 2009 y el mismo día y mes de 2006), como lo exige el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y que continúa cotizando, permaneciendo activa en el Sistema de Pensiones hasta la actualidad, **no está debidamente probado que tales cotizaciones se causaron en ejercicio de la denominada capacidad laboral residual**, como lo exige la jurisprudencia citada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y la H. Corte Constitucional.

Demostrándose por parte de COLPENSIONES con la historia laboral actualizada al 15 de enero de 2021 (expediente administrativo), que la señora María de las Mercedes ha continuado efectuando cotizaciones al Sistema de Pensiones en forma posterior a la calificación de la invalidez y no solo hasta el día 30 de mayo de 2016 -fecha en que se afirma que *la demandante perdió de forma definitiva y permanente su capacidad laboral y no pudo seguir aportando al Sistema de Pensiones debido a su cuadro clínico-*, sino hasta el 30 de noviembre del año 2020; hecho que no permite acoplar el presente asunto a los parámetros fijados por la jurisprudencia antes citada, según la cual, **serían válidas las cotizaciones efectuadas en virtud de la capacidad laboral residual, que le permite al trabajador continuar trabajando y cotizando, hasta el momento en que definitivamente perdió por completo su fuerza laboral** y sería esta la fecha de referencia para contabilizar la densidad de semanas exigida en la normatividad aplicable; **aspectos que se exige probar en debida forma, lo que no está demostrado en el presente asunto.**

Observa esta Judicatura que la afiliada mantiene activas sus cotizaciones al Sistema de Pensiones, de donde podría inferirse que conserva vigente su capacidad laboral, pero no solo hasta noviembre de 2020 como informó COLPENSIONES al responder la demanda, sino hasta la actualidad, pues según el reporte de semanas allegado por la apoderada de la demandante con los alegatos de conclusión, generado el 20 de septiembre de 2022, registra cotizaciones inclusive hasta el día 31 de julio de este año; sin que más allá de la formalidad en el pago de las cotizaciones y su registro en la historia laboral, exista constancia referente a la prestación del servicio en una actividad laboral, como producto de una real capacidad residual de la demandante, pues sobre ello no se aportó prueba alguna al proceso y lo que sí aparece demostrado, es que la demandante se encuentra residiendo en España desde hace varios años, tal como consta en la historia clínica (fls 78 a 83 archivo 03), país donde también se apostilló el poder otorgado el día 21 de octubre de 2019 (fls 9 y 10 archivo 03).

En tal sentido, eventualmente también se desvanecería la posibilidad de tomar la última cotización efectuada al Sistema de Pensiones, como referente para la contabilización de la densidad de semanas exigida en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, toda vez que la demandante continúa como cotizante activa en el Sistema de Pensiones y se reitera, no está demostrado más allá de lo formal, que esas cotizaciones son producto de una verdadera capacidad laboral residual; tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

Por lo expuesto, **no es procedente tomar como referencia la fecha del dictamen** -25 de septiembre de 2009- **o la última cotización** –hecho que no ha ocurrido siquiera al ser cotizante activa-, **para efectos de acreditar la densidad de**

**semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez, sin que esté demostrado que las cotizaciones son producto de una verdadera capacidad residual.**

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia** que por vía de Apelación se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

#### **COSTAS:**

**Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de la demandante, al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado,** fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000 en favor de COLPENSIONES; conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

#### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa,

incluyendo lo relativo a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se condena en **Costas en esta Segunda Instancia** a cargo de la demandante María de las Mercedes Gómez Vásquez, fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000 en favor de COLPENSIONES; según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES





**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SECRETARIA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **MARÍA DE LAS MERCEDES GÓMEZ VÁSQUEZ**  
**Demandadas** : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 005 2020 00285 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, capacidad laboral residual-  
**Decisión** : Confirma Sentencia absolutoria  
**Sentencia No** : 260

**FECHA SENTENCIA:**

18 de noviembre de 2022

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy martes 22 de noviembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 22 de noviembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO